

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, ocho (8) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por JAVIER ANDRÉS AGUINAGA NANCLARES, YULIETH CRISTINA GARCÍA PIEDRAHITA, SUSANA AGUINAGA GARCÍA y CAROLINA NANCLARES BEDOYA contra REFORMAS Y CONSTRUCCIONES C & J S.A.S (Radicado 05001-31-05-017-2021-00338-01).

ANTECEDENTES:

Los demandantes pretenden se declare la existencia de un contrato de trabajo con la sociedad bajo la modalidad de obra o labor ejecutado por Javier Andrés Aguinaga entre el 31 de julio de 2019 y el 27 de junio de 2021, presentándose el 17 de octubre de 2019 un accidente de trabajo por culpa exclusiva de la demandada. En consecuencia, solicita el reconocimiento de la indemnización total y ordinaria de perjuicios, la indexación y las costas del proceso.

Como hechos relevantes de sus súplicas narraron que Javier Andrés comenzó a laborar con la demandada desde el 31 de julio de 2019 y hasta el 27 de junio de 2021 bajo un contrato por obra o labor donde cumplía funciones como ayudante de construcción, devengando un salario mínimo legal mensual vigente. El 17 de octubre de 2019 cuando Javier Andrés se encontraba lavando una máquina concretadora sufrió un accidente por atrapamiento de su mano izquierda que le

generó aplastamiento y la pérdida de los dedos 3,4 y 5. Adujeron que el espacio para operar se encontraba en un estado deficiente, la máquina no tenía señalización de peligro o advertencias de uso adecuado ni dispositivos de emergencia, tampoco fueron entregados al trabajador instructivos, guías o procedimientos para la manipulación de la maquinaria, además de no contarse en el lugar con supervisión para evaluar y orientar las labores de los trabajadores, ni evidenciarse la capacitación para la utilización de herramientas y maquinaria. El 22 de abril de 2021 Javier Andrés fue calificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con un 43.19% de pérdida de capacidad laboral. Indican que su madre, compañera sentimental y su hija han padecido tristezas y angustias dada la afectación y las secuelas trágicas por la pérdida en la integridad de su familiar.

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES C & J S.A.S dio respuesta en oportunidad al libelo con oposición de las pretensiones. Aceptó la vinculación surtida bajo el contrato aducido y en los extremos referenciados, indicado que si bien ocurrió el accidente de trabajo detallado lo fue por omisión en el trabajador de acatar normas de seguridad en tanto la maquinaria no se encontraba en un lugar inseguro y contaba con todos los protocolos de seguridad necesarios para su operación, agregando que incluso el día del suceso el actor no era el encargado de la limpieza de la máquina. Se abstuvo de formular medios exceptivos.

Surtido el trámite de rigor, mediante providencia que se emitió el 17 de febrero de 2022, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a la demandada a reconocer la indemnización plena de perjuicios dispuesta en el artículo 216 del CST con ocasión del accidente de trabajo sufrido por Javier Andrés Aguinaga, imponiendo la suma de \$15.487.286 por lucro cesante consolidado, la suma de \$82.056.269 por lucro cesante futuro y \$20.000.000 por perjuicios morales. ABSOLVIÓ a la sociedad de las demás súplicas del señor Aguinaga y de todas las pretensiones formuladas por YULIETH CRISTINA GARCÍA, SUSANA AGUINAGA y CAROLINA NANCLARES BEDOYA. CONDENÓ en costas a la demandada, fijando las agencias en derecho en la suma de \$5.000.000.

La pasiva se apartó de la decisión señalando que en el asunto las condenas impuestas no son procedentes, porque en el trámite logró demostrarse que la

empresa sí suministró inducción y capacitación en cuanto a los riesgos profesionales de la labor dada su propia naturaleza. Indicó que en este caso la culpa entera debe atribuirse a las causas personales en tanto se presentó un acto imprudente del trabajador, sin que para la decisión se hayan valorados todas las pruebas de donde se extrae que la empresa no omitió los requerimientos legales ni jurisprudenciales en materia de seguridad y salud en el trabajo. En ese orden pide la revocatoria de la decisión para obtener la absolución de lo pedido.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Estando por fuera de toda discusión la vinculación de índole laboral discutida donde el señor Javier Andrés Aguinaga se desempeñaba como ayudante de construcción, a partir de los argumentos expuestos en la apelación, corresponde a la Sala dilucidar si el accidente de trabajo sufrido el 17 de octubre de 2019 tuvo origen por culpa comprobada de la parte empleadora que implique el reconocimiento de la indemnización ordinaria y plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Pues bien, la culpa patronal con ocasión de un riesgo laboral se encuentra consagrada en el artículo 216 del CST, norma de la que se descomponen los fundamentos medulares de la misma, siendo pertinente afirmar que ésta se configura cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o enfermedad laboral a la luz de los artículos 3º y 4º de la Ley 1562 del 2012, por la conducta culposa del empleador, quien por tal hecho, resulta obligado a reparar integralmente el daño en todas sus órbitas.

Al respecto, y en concordancia con lo que establece el artículo 167 del CGP la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, ha dicho reiteradamente en su jurisprudencia, que la activa tiene la carga de probar de manera suficiente la culpa del empleador en el entendido que la afectación a su integridad y salud fue consecuencia de la negligencia del empleador en el acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de sus

trabajadores (Ver Sentencias, SL2349 de 2018 y SL2248 de 2018, SL5154-2020 SL2338-2022). Solo así, se da origen a la indemnización contemplada en el mencionado artículo 216 y en contraposición a ello, el empleador puede desligarse de ella, demostrando su diligencia y cuidado para la realización del trabajo asignado al trabajador.

Esa responsabilidad del empleador en la ocurrencia de un infortunio laboral se determina luego del análisis de las pruebas que denoten el cumplimiento o no de los deberes de prevención que le corresponden a aquél, ya sea que se derive de una acción, de un control ejecutado de manera incorrecta o de una conducta omisiva a su cargo (CSJ SL2206-2019). La prueba igualmente, es la que determina si el responsable del daño causado por las contingencias del trabajo resulta ser el empleador, o lo es a título personal su representante, o lo es el mismo trabajador, o aún, si el hecho causante del daño provino de un tercero o entre éste y aquéllos pudo haber concurrencia de culpas (Ver SL2606-2022).

Ya en los eventos en que se imputa negligencia al dispensador del empleo, es a éste a quien le compete la prueba del cuidado o del acto que enerve la responsabilidad, como la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, aportando las pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores (Ver SL2644-2016 y SL902-2019), ello en coherencia con lo que regulan los artículos 57 y 348 del CST, que en síntesis pregonan la obligación del empleador de poner a disposición de sus trabajadores los instrumentos y locales adecuados para desempeñar en óptimas condiciones de seguridad la labor, lo que guarda armonía con las disposiciones en materia de salud ocupacional.

En ese orden, en acatamiento igualmente con lo que establece el artículo 84 de la Ley 9 de 1979, la parte patronal tiene unas obligaciones para mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, con responsabilidad de un programa permanente con ese fin, adoptar medidas para promover la seguridad y la salud mediante la instalación, operación y mantenimiento en forma eficiente de los sistemas y equipos y realizar programas educativos sobre los riesgos a los que se esté expuesto, con lo que se evita la producción de daños, para lo cual deben adoptarse políticas de seguridad y salud en el trabajo por medio de un comité paritario que detecte los riesgos

ocupacionales y adopte las medidas necesarias que impida la producción de un daño o un evento desafortunado.

Cabe señalar que el Convenio 167 y la Recomendación 175 sobre seguridad social y salud en la construcción, adoptados a través de la Ley 52 de 1993, incorporaron como factor de responsabilidad la necesidad del control efectivo del empleador, en punto a los métodos y a la utilización de las herramientas brindadas, las cuales en todo caso se deben proveer de buena calidad a más que deben adoptarse las medidas preventivas encaminadas a proteger a las personas que se encuentren en una obra o en sus inmediaciones de todos los riesgos que pueden derivarse de la misma.

De tal suerte que en aras de resolver este aspecto es necesario auscultar el material probatorio, contando al respecto con el informe del accidente de trabajo rendido por la ARL Positiva (Pág. 26 Archivo 01), de donde se extrae que el accidente aconteció por el mecanismo de atrapamiento durante el lavado de una máquina concretadora en movimiento, la que le tomó la camisa al trabajador y le cogió la mano izquierda a la altura de la muñeca y la palma de los dedos, acontecimiento que originó las patologías de *“trauma por aplastamiento de la muñeca, palma y dedos de mano izquierda”*, *“amputación traumática combinada de dedos y muñeca de la mano izquierda”* y *“trastorno de adaptación de síntomas mixtos con predominio ansioso”* (Págs. 27-28 Archivo 01). En la investigación del incidente efectuado el 24 de octubre de 2019 por la misma ARL (Págs. 30-33 Archivo 01), se determinaron como causas básicas dentro de los factores del trabajo la evaluación deficiente de la condición conveniente para operar y la entrega insuficiente de documentos de consulta, instructivos, publicaciones y guías; y como causas inmediatas la limpieza del equipo en movimiento sin protección del riesgo mecánico, generándose como medidas de intervención la divulgación del manejo seguro de la concretadora, la señalización de la máquina con el riesgo de atrapamiento, la documentación de las normas para el lavado y mantenimiento de la máquina, realizar actividades de formación en autocuidado e identificación de riesgos y peligros.

Ya de parte de una profesional externa a la empresa con licencia para prestar servicios en salud ocupacional (Págs. 34-35 Archivo 01), se efectuó el análisis del accidente presentado, desentrañando como sus causas el uso de la camisa de

dotación suelta, la ausencia de dispositivos de emergencia en la máquina, la no señalización del peligro de atrapamiento, el irrespeto del trabajador a los programas de formación, la supervisión inadecuada, limpiar la máquina en movimiento, no contar con un programa de inspección a maquinaria, no contemplarse métodos preventivos y encontrarse el terreno donde se encontraba el trabajador inestable (Pág. 37 Archivo 01)

Sobre tal hecho fueron traídos por la pasiva tres declarantes, dos de los cuales estaban dentro de la obra donde ocurre el evento: HUMBERTO VELÁSQUEZ BLANCO y JULIO CÉSAR QUINTANA, los que fueron enfáticos al advertir que dentro de la empresa al ingresar y en la ejecución de los contratos se les capacita para el manejo de las máquinas con la insistencia de los riesgos que estas acarrearán, y que específicamente sobre la máquina concretadora, se tenía claridad que su mantenimiento y lavado debía realizarse sin energía pero que Javier Andrés por “*afán*” y “*desespero*” le indicó al compañero que la estaba lavando ese día que no era la manera y procedió con su lavado con ella encendida, sin que la máquina contara con alguna guarda de seguridad para evitar el atrapamiento ni señalización de ese riesgo, advirtiéndose como testigos presenciales del hecho que a su juicio el accidente tuvo por causa principal el tener la máquina prendida, tener la camisa desabotonada y haber fumado marihuana previo a esa labor. Señalaron que el encargado de la obra era Abelardo Cárdenas pero que para el momento del accidente no se encontraba, así como tampoco lo estaba el personal de seguridad y salud en el trabajo que hacía ronda aproximadamente una vez por día, y que Julio César estaba designado como brigadista, quien en voces del representante legal de la demandada, no tuvo la mejor reacción ante el evento.

De lo previo puede decirse que atendiendo a que a la sociedad demandada se le endilgan omisiones e incumplimientos, era de suyo demostrar que contrario a ello actuó con la diligencia que emplearía un buen padre de familia en la administración de sus negocios dada la naturaleza bilateral del contrato laboral en relación a las medidas de cuidado y protección de sus trabajadores, pero a juicio de esta colegiatura, tal carga probatoria no fue satisfecha, ya que por el contrario lo que dejan en evidencia las investigaciones desarrolladas y las condiciones en que se desplegó el accidente, es que conscientes del riesgo creado dada la evidente exposición de sus trabajadores por el manejo de maquinaria y por el oficio mismo, no se tiene por demostrado que se hayan adoptado todas las

precauciones adecuadas para garantizar que el lugar de trabajo y las herramientas proporcionadas a los trabajadores fueran seguras y estuvieran exentos de riesgos para la seguridad y la salud, ni que se hayan tomado las medidas preventivas necesarias, pues si bien es claro que en voces de la H. Corte Suprema de Justicia la seguridad y salud en el ámbito de la construcción atañe a todos los intervinientes de forma armónica, lo que involucra a los empleadores y trabajadores, al dador del empleo le resulta imperativo no solo proporcionar ropa y equipos de protección personal adecuados (Ver SL34 de 2019), sino exigir el cumplimiento de las normas de seguridad con supervisión estricta de que así se acate y si es del caso, le atañe suspender la actividades laborales hasta que se implementen las medidas requeridas.

En el asunto queda claro conforme a lo documentado, que la parte empleadora brindó para el 02 de julio de 2019 una capacitación sobre los riesgos presentes en obra relacionados con las herramientas, las máquinas y equipos de donde se desprende la asistencia del actor (Pág. 41 Archivo 01), pero es que esa constancia de asistencia se hace precaria para conocer los temas abordados de donde pudiera desprenderse la debida inducción y preparación no solo para el manejo general de la concretadora en función de la labor propia de la construcción, sino para su mantenimiento y lavado, ya que si bien los deponentes afirmaron que uno de los protocolos destinados para proceder con el aseo de esa herramienta era apagarla, del que aseguraron era la pauta más clara recibida por el SISO o el encargado de la seguridad y la salud en el trabajo, también se pregonó que el compañero que en una primera oportunidad estaba ejerciendo esa labor de aseo - el mono- igualmente tenía la máquina prendida, lo que muestra una deficiente promoción de ese mecanismo de prevención a efectos de cuidar en la forma debida la integridad y salud del trabajador que la opera, quedando por demás sentando que todos los que integraban esa obra que lo fueron aproximadamente cinco personas podían ser llamados al lavado y lo hacían con manguera y electricidad, por lo que dado el riesgo mecánico y eléctrico presente, el procedimiento seguro y las medidas de prevención, supervisión y vigilancia debieron ser de una suficiencia y claridad tal que los hechos que derivaron en la lesión grave del actor en el ámbito de trabajo no pudiera ocurrir de parte de ninguno de los ayudantes u oficiales dentro de la obra, lo que no trasluce de lo probado.

Y se arriba a esa conclusión, porque más allá de una inducción que al parecer fue general sobre todos los riesgos en obra, y la existencia dentro de la compañía de personal dedicado a la salud ocupacional e industrial, lo que permiten concluir de forma puntual en las condiciones de modo, tiempo y lugar de ocurrencia del siniestro, es que por lo menos para esa obra bajo la absoluta confianza de tratarse de una no tan compleja porque se cimentaba en la montada de un jacuzzi en una finca ubicada en el Retiro - Antioquia, no existió un mecanismo contundente y concreto de proscripción del resultado adverso a partir de la estipulación de medidas de formación específica, prevención de los riesgos en virtud al puesto de trabajo y seguridad previas, no estaba presente el personal SISO, e incluso, los primeros auxilios al momento del acontecimiento debieron proveerse por los mismos compañeros de obra, quienes por sus medios y con ayuda del dueño de la finca debieron socorrerlo amarrando una camiseta a su mano izquierda y buscando un carro para su transporte en busca de atención médica, no existiendo evidencia clara sobre que alguno de los presentes para ese momento, tuviera una capacitación idónea y certificada como brigadista para la reacción apropiada ante casos de emergencia como el presentado con Javier Andrés Aguinaga.

Es necesario anotar que la experiencia del trabajador precisada por él mismo en la entrevista brindada al ser investigado el accidente del que fue víctima (Pág. 32 Archivo 01) e incluso las capacitaciones brindadas, no relevaban a la parte empleadora de propender por la implementación y cumplimiento de las normas de seguridad, por lo que Reformas y Construcciones J & C S.A.S estaba obligada no solo a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que valga decir, no se reportaron con falla para el evento, sino también, a adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables donde a través de un programa de salud ocupacional estructurado y diseñado a partir de los potenciales peligros que los oficios en la obra proyectan, se incluyera el instructivo sobre el manejo de la máquina que por demás estaba siendo suministrada por un proveedor externo, las restricciones y prohibiciones de operar y asear con la máquina prendida o conectada, la necesaria señalización sobre el peligro de aplastamiento o las contingencias que su solo uso pudiera originar, y la debida utilización de la dotación y elementos de protección en la ejecución de sus labores y de la maquinaria, no encontrando que para la data del accidente se encontrara efectuado por la demandada un adecuado análisis del riesgo al que exponía a su extrabajador al operar estos artefactos o por lo menos ello no así está

documentado, con lo que razonablemente le hubiera sido posible establecer que la presencia de una herramienta energizada sin la información y capacitación precisa para su manipulación podía causar en su habitual actividad o en su mantenimiento y aseo, como lo hizo, un accidente por su indebido contacto.

Lo precedente quiere decir que la sociedad demandada incumplió con la trascendental obligación de llevar a cabo una política de seguridad y salud en el trabajo regulada en lo pertinente por la Ley 9 de 1979, la Resolución 2400 del mismo año del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Decreto 614 de 1984, la Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios del Trabajo y de Salud, el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, con lo que hubiera podido de manera oportuna y prudente identificar los riesgos ocupacionales y tomar todas las medidas de prevención pertinentes, y así derivar en la ausencia de culpa de su parte.

Pero no siendo ello poco, para el momento del accidente grave había una carencia absoluta de supervisión al personal y de las herramientas utilizadas, encontrándose en el lugar ayudantes y oficiales sin superior, persona con autoridad suficiente, o encargado para controlar su labor y que dispusiera el acatamiento de las normas de seguridad, puesto que la supervisión y el control del empleador le impone la necesidad de ordenar qué hacer en el marco de las funciones contratadas, pero también instruir qué no hacer para evitar una situación dañosa cuando advierte la potencialidad de un siniestro y tener la posibilidad de corregir cualquier incidente que ponga en peligro la integridad y bienestar de sus colaboradores, encontrando que en esta oportunidad esa vigilancia de parte del empresario no se dio de una forma oportuna, con lo que pudo controlarse el resultado de la labor encargada al trabajador, erigiéndose la relevancia del constante acompañamiento y supervisión de forma técnica, mediata e inmediata (Ver SL4400-2020), lo que también funda como causante del suceso la existencia de una supervisión y liderazgo deficientes, pues a partir de una cadena de mando respecto del demandante como trabajador con jerarquía, pudieron impartirse órdenes para la dejación del aseo con la máquina encendida y la camisa desabotonada, instrucciones simples que sin lugar a dudas hubieran evitado la consecuencia desafortunada.

Es verdad que en el accidente influyeron de manera importante los actos imprudentes del trabajador enlistados en ambas investigaciones, porque su

dotación estaba incorrectamente utilizada que fue lo que generó que la máquina lo halara desde la manga de su camisa, además de estar impulsando su aseo en movimiento, pero es que aun cuando existen conductas atribuibles al laborante, no tienen la entidad de exculpar a la enjuiciada del siniestro, porque de manera alguna su responsabilidad se extingue por existir un comportamiento descuidado del trabajador (Ver SL1186-2022 y SL3594-2022), pudiendo de hecho atribuirse esas conductas a la abstención de la empresa de promover los programas necesarios y aptos para que el trabajador comprendiera los riesgos del procedimiento utilizado, a más que los medios demostrativos no reflejan que se tratara de un accidente imposible de prever para la parte patronal, pues lo que se advierte es que el accidente que tuvo como consecuencia la lesión en el demandante, no podía ser considerado como un hecho imprevisto, mucho menos inevitable ya que las contingencias a partir del manejo de maquinarias en el contexto de la construcción donde conforme al Decreto 1607 de 2002 y el artículo 26 del Decreto 1295 de 1994 la actividad está catalogada como un “*riesgo máximo*”, son un hecho absolutamente previsible.

De tal suerte que el nexo causal entre la omisión del empleador y el accidente del caso de autos es evidente, pues si para el manejo del artefacto se hubiera contado con las medidas de formación, prevención, señalización y supervisión, el trabajador hubiera maniobrado la máquina bajo los estándares de seguridad que hubieran impedido el funesto resultado.

Bajo todas las anteriores reflexiones la decisión revisada en apelación habrá de ser confirmada porque la valoración de las pruebas conduce a la convicción de la existencia de culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente sufrido por el trabajador el 17 de octubre de 2019.

Finalmente, conforme a lo preceptuado en el artículo 365-1 del CGP y por la forma en que fue resuelta la alzada, en esta instancia las costas están a cargo de la demandada. Agencias en derecho \$1.160.000.

DECISIÓN:


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada, de fecha y procedencia conocidas.


Costas de la instancia a cargo de la parte demandada. Como agencias en derecho fíjese la suma de \$1.160.00.

Notifíquese por EDICTO.


Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA
EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310501720210033801
Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: YULIETH CRISTINA GARCIA PIEDRAHITA
Demandado: REFORMAS Y CONSTRUCCIONES C & J. S.A.S.
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 8/03/2023
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 9/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario